

Condena unánime: la peor cara de México en materia migratoria (Isaín Mandujano, pág. 26-31)

Tapachula, Chis.—Ante la primera caravana de migrantes de 2020, el gobierno federal reforzó las medidas de seguridad a lo largo de los 965 kilómetros de la frontera sur del país para frenar la entrada de indocumentados centroamericanos —en particular los procedentes de Honduras— que intentan llegar a Estados Unidos atravesando territorio nacional. Efectivos de la Guardia Nacional (GN), del **Instituto Nacional de Migración (INM)**, así como de la Marina y de la Policía Militar formaron un muro de contención casi impenetrable en la localidad del Ceibo, en Tenosique, Tabasco, y el Suchiate, en la zona baja del Soconusco de Chiapas. En esos puntos, agentes migratorios y de la GN frenaron a los casi 5 mil integrantes de la caravana de centroamericanos. Y empezó la cacería contra quien intente desplazarse hacia la frontera con Estados Unidos. El viernes 24 ya habían sido deportadas 867 personas; 627 de ellas vía aérea y 240 vía terrestre. Ese mismo día en Ginebra, Suiza, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, expresó su rechazo al uso de la fuerza perpetrada por la GN contra los migrantes centroamericanos.

Andrej Mahecic, vocero del Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), apoyó lo dicho por la oficina de Bachelet y agregó que es indispensable que las autoridades mexicanas recuerden que “están sujetas a leyes internacionales en lo que se refiere a las normas de protección de refugiados”. Según Mahecic, “cualquier persona que afirma huir de la violencia, que teme por su vida o corre peligro y clama por asilo, tiene derecho a solicitarlo y se le debe autorizar para permanecer en el territorio en donde lo pide”. Claudia León, del Servicio Jesuita de Atención a Migrantes, así como miembros del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, integrado por organizaciones civiles y activistas defensores de derechos humanos, consideran que, literalmente, “hay una cacería humana”.

El acoso

Melisa Vértiz, del Grupo de Trabajo de Política Migratoria, una red de la sociedad civil formada por organizaciones y personas que trabajan a favor de los derechos de los migrantes, asegura que en la frontera sur mexicana se está registrando “la peor cara de la política migratoria que haya tenido México a lo largo de su historia”. Es lamentable que México haya cedido ante Estados Unidos su política migratoria a cambio de cero aranceles y demás sanciones comerciales. La estrategia de contención y control migratorio —comenta— está ahora al servicio de la política migratoria estadounidense expandida de forma extra-territorial hasta la frontera sur mexicana.

Con su política de criminalización de la migración, refiere Vértiz, el gobierno de López Obrador manda un mensaje muy negativo que se replica en la sociedad mexicana, donde hay ya un rechazo al migrante, un discurso de odio y

discriminación como el que sufren los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Es urgente, comenta, que el Congreso de la Unión asuma un papel de contrapeso y deje de avalar todas las políticas públicas, incluso represivas, del Ejecutivo. Según ella, la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur debe ser un llamado a reformar las leyes migratorias y armonizar otras para tener una política más humanitaria y menos lesiva hacia los migrantes.

Luis Rey García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, e Irineo Mujica, del organismo Pueblos Sin Fronteras, han sido gaseados igual que los migrantes, por acompañar a quienes integran las caravanas. Ambos han sido perseguidos y encarcelados; incluso han sido señalados de lucrar con el fenómeno migratorio, pero no se intimidan. El jueves 23 García Villagrán estaba con los miembros de la caravana de migrantes, ayudándoles a llenar un formato de solicitud de refugio ante la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar), de la Secretaría de Gobernación. Ya se habían elaborado mil 118 solicitudes; incluso Alma Delia Cruz Márquez, de la Comar, y Paola López Rodas, del INM, habían acordado los trámites. Sin embargo, todo se vino abajo con la cacería. “Hubo una represión terrible y salvaje por parte de la Guardia Nacional, del Ejército y de elementos del INM. De tal manera que hay muchos heridos, incluso un niño, al que se llevaron inconsciente los paramédicos”, dijo García Villagrán.

Desplazamientos forzados

Mujica, quien ha visto actuar a presuntos agentes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos con uniformes del INM, asegura que la política migratoria está ahora en manos del gobierno de Estados Unidos. Y añade: “El gobierno de López Obrador hace el trabajo sucio del gobierno de Estados Unidos, hace el papel de Border Patrol y, lo que es peor, le ayuda en su campaña de reelección a Donald Trump. Salva Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova Ordóñez, asegura que desde abril del año pasado la cuestión migratoria se le complicó al gobierno federal. “Hay todo un aparato policial y militar para perseguir, detener y deportar personas. Todo apunta a que las cosas no van a mejorar, y que a México le toca cumplir el papel de guardián de la frontera. Eso no va a cambiar mientras Trump esté en el poder y López Obrador también”, dice.

El viernes 24 burlaron a la GN y a los agentes del INM y avanzaron hacia el puente fronterizo Suchiate 2, dos kilómetros arriba de donde hacían guardia los uniformados. Ahí esperaron varias horas para avanzar, pero los efectivos de la GN los atacaron con gas lacrimógeno y desarticularon el contingente. Varios centroamericanos fueron detenidos y enviados a la Estación Migratoria Siglo XXI. En la zona Costa-Soconusco de Chiapas, un importante corredor migratorio, así como en Palenque y Comitán, la GN y los agentes del INM instalaron retenes migratorios y comenzaron a patrullar las calles en las principales ciudades fronterizas, las vías del tren, los parques y plazas centrales en busca de centroamericanos.

Guatemala se lava las manos

(Julie López, pág. 28-29)

Guatemala.- En este país el interés está fijado más en la seguridad interna que en impedir el paso de las caravanas de migrantes que se desplazan por su territorio desde Honduras hasta México, en su afán de llegar a Estados Unidos. La única intervención guatemalteca ha sido la asistencia a los migrantes hondureños que se acogen al programa Retorno Seguro en Tecún Umán, que colinda con Ciudad Hidalgo, México. Sólo las separa el río Suchiate. El vocero del Ministerio de Gobernación (Mingob), Vinicio Pacheco, señala que el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) se ha encargado del traslado desde Tecún Umán hasta la frontera con Honduras y que los migrantes han sido trasladados en autobuses de la Policía Nacional Civil (PNC). Ambas instancias, el IGM y la PNC, dependen del Mingob.

La capacidad de Guatemala para ejercer una vigilancia rigurosa en la frontera es nula. Actualmente hay un policía por cada 453 habitantes (cerca de 37 mil uniformados entre una población de 17 millones) y la nueva administración presidencial –que tomó posesión el martes 14– ha demostrado más interés en utilizar a su fuerza policial y militar en tareas de seguridad interna. Mientras que miles de migrantes hondureños y salvadoreños se desplazaban por el territorio guatemalteco para llegar a México, el gobierno utiliza la fuerza pública en tareas de prevención en los municipios con más altos índices de criminalidad, como Villa Nueva y Mixco, y el departamento de Sacatepéquez, que colindan con la capital.

Convenio CA-4

El convenio CA-4 permite a los centroamericanos desplazarse desde el resto del Triángulo Norte hacia Guatemala, y el acuerdo Tercer País Seguro con Estados Unidos no obliga a Guatemala a prevenir la salida de los mismos hacia el norte. Los pocos migrantes que solicitaron asilo a Estados Unidos y fueron enviados a suelo guatemalteco, como parte del acuerdo, decidieron volver a sus países voluntariamente.

Aunque el gobierno guatemalteco tuviera la intención de frenar las caravanas no tendría la capacidad para hacerlo. El acuerdo Tercer País Seguro, firmado por el anterior presidente, Jimmy Morales, incluye una cláusula en la que Estados Unidos se comprometía a mejorar las capacidades de Guatemala para aplicar el acuerdo. Sin embargo ni la administración anterior ni las autoridades estadounidenses han divulgado detalles de cómo fortalecer esas capacidades.

El muro invisible de Donald Trump

(Mathieu Tourliere, pág. 30-31)

Mientras la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) frenaban con toletes y gases lacrimógenos a la caravana migrante que ingresaba durante la

madrugada del jueves 23, cinco aviones salieron de Estados Unidos rumbo a la Ciudad de Guatemala con 23 solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños. Bajo el Acuerdo de Cooperación y Asi-lo (ACA) que el gobierno de Estados Unidos impuso al de Guatemala en julio de 2019, la nación centroamericana pasó a ser un “Tercer País Seguro” para Washington. Este acuerdo permite al gobierno de Donald Trump enviar a Guatemala a los extranjeros que le piden asilo. Sólo durante el año pasado, 313 mil personas huyeron de ese país que carece de recursos para atender a los refugiados. Quienes escaparon de la miseria y la violencia fueron detenidos por las autoridades mexicanas o estadounidenses. El lunes 6 la agencia Reuters reveló que la administración Trump planeaba incluir a los solicitantes de asilo mexicanos en la población susceptible de ser expulsada a Guatemala, cable que confirmó la versión que comenzó a esparcirse cuando en diciembre último Ken Cuccinelli, el segundo mando del Departamento de Seguridad Interna (DHS), expresó su preocupación por el incremento de detenciones de mexicanos en la frontera sur estadounidense.

“Si se concretara que los mexicanos terminen en Guatemala, le llamaría la ‘cereza de este pastel inhumano’ de las políticas migratorias de Trump que ahora nos tocarían de manera más explícita”, **opina el doctor Tonatiuh Guillén López**, quien encabezó el **Instituto Nacional de Migración (INM)** los primeros siete meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El plan del gobierno de EU

En entrevista con Proceso, el académico dice que el anuncio “está completamente en el guion trazado desde el año pasado. Es una secuencia muy consecuente de la actitud xenófoba y racista de Trump, es un maltrato adicional a este grupo de mexicanos, pero es coherente con un maltrato generalizado que está haciendo con todo el mundo, literalmente.

El investigador asegura que dicha medida es sólo un eje de varios que tiene la estrategia de Donald Trump. “Uno de ellos consiste en convertir a los países del flujo de migrantes en terceros países seguros. Por lo menos de manera explícita están en este escenario los acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras. Serán países y políticas de gobierno que van a funcionar como redes”. El miércoles 8 el portal BuzzFeed News reportó que el gobierno estadounidense había “suspendido temporalmente” su plan de enviar solicitantes de asilo mexicanos a Guatemala. Dos semanas más tarde, el miércoles 22, el gobierno entrante de Guatemala de Alejandro Giammattei confirmó que mantendrá el ACA.

Un “verdadero socio”

A lo largo de 2019 el gobierno de López Obrador impidió que más de 271 mil personas lleguen a Estados Unidos y aceptó que el gobierno de Trump devolviera a México a poco más de 56 mil solicitantes de asilo bajo el polémico programa de Protocolos de Protección a Migrantes, mejor conocido como “Quédate en México”. La semana pasada funcionarios del DHS celebraron en reiteradas

ocasiones los operativos de la Guardia Nacional y del INM en Chiapas para frenar las caravanas de indocumentados. En menos de tres días los uniformados mexicanos detuvieron a al menos 3 mil personas, pese a los reclamos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos del estado. Chad F. Wolf, titular interino del DHS, elogió al gobierno mexicano por “defender su compromiso” de reforzar su frontera sur. Tras refrendar que los “esfuerzos” de la GN y del INM fueron “efectivos” en dismantelar las caravanas migrantes, afirmó que “tenemos a docenas de personas en el terreno en Centroamérica asistiendo a agentes de migración y de policía”.

Al preguntarle sobre las acciones de contención migratoria emprendidas por el gobierno de López Obrador, Guillén dice se trata de una medida derivada de las presiones estadounidenses. “El gobierno de EU se portó muy rudo, muy amenazante, hubo una reacción del Estado mexicano que le hizo incrementar el rol del aparato de contención, no sólo del INM, también de la Guardia Nacional. Agrega: “No hay que olvidar que el propósito final es inhibir y cerrar la migración a Estados Unidos y también las políticas de asilo. Con este objetivo Trump ha movido medio mundo”.

Tragedia en la frontera sur *(Olga Pellicer, pág. 43-44)*

Las reacciones a lo que ocurre en la frontera sur ante los intentos de una caravana de migrantes centroamericanos de entrar al territorio nacional, han producido malestar, incertidumbre y confusión. A nadie convencen los argumentos en el sentido de que hay pleno respeto a los derechos humanos y voluntad de ser solidarios con quienes huyen de la violencia, la falta de oportunidades económicas y los desastres ecológicos. A nadie convence el papel desempeñado por la recién creada Guardia Nacional para repeler a mujeres y niños cruzando el río; irrita saber que cumplen ese papel a petición del presidente Trump, quien amenaza con dañar a la economía mexicana si no se contiene a los migrantes. Hay una crisis de legitimidad de las políticas migratorias del gobierno de AMLO. En primer lugar, los cambios tan bruscos en la narrativa para tratar a los migrantes centroamericanos producen desconfianza. ¿Las promesas y actitudes con que se conquistó el poder se abandonan tan fácilmente?

Imaginar que se pueden parar esos flujos históricos colocando efectivos de la Guardia Nacional en algunos puntos es simplemente ilusorio. El tratamiento del problema migratorio de sur a norte, cuando se trata de llegar a Estados Unidos, es mucho más complejo. México está en el camino. La solución, si se encuentra, es de largo plazo. Otro elemento importante a tomar en consideración es el cambio demográfico que ha tenido lugar en la migración centroamericana. Después de años en que eran contingentes de hombres jóvenes en busca de trabajo, comenzaron a incorporarse buen número de mujeres jóvenes y, lo que ha llamado mayormente la atención, menores no acompañados.

Finalmente, el elemento de mayor peso para lo que ocurre en la frontera sur es, desde luego, la política migratoria de Donald Trump. Como parte de un objetivo más general, como es avanzar hacia America First, entendiendo por ello una América blanca anhelada por los supremacistas blancos que lo acompañan, Trump ha convertido a la migración centroamericana en amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Muy probablemente utilizará el éxito en haberla detenido como un buen argumento de campaña. En efecto, es un punto que satisface a su clientela de poca educación y muchos prejuicios

La gran tarea pendiente es la cooperación para el desarrollo integral del sur de México y los países del Triángulo del Norte en Centroamérica. Una tarea cuyos primeros pasos se están dando y en la que no se cuenta con el apoyo del gobierno de Trump. Es notable la distancia entre el nivel de compromisos que ha asumido México y la escasa responsabilidad de Estados Unidos en contribuir, por ejemplo, con los grandes costos financieros asociados a la contención de migrantes. Sin quererlo, México acabó pagando por un muro que nunca será la solución.